



Sentencia definitiva

Zapopan, Jalisco, veintiséis de agosto de dos mil veintiséis

En audiencia de juicio se declaró suficientemente visto, para resolver en sentencia, el juicio oral mercantil 59/2026-IV, promovido por **** * * * *

*****¹, contra *****

*** *****

Síntesis de actuaciones

I. Presentación de la demanda

Mediante escrito depositado el tres de febrero de dos mil veintiséis, en el buzón judicial de los juzgados de distrito en materia civil en el estado de Jalisco, la parte actora, por conducto de su administrador general único, demandó, en la vía oral mercantil, de la enjuiciada cuya denominación se indicó previamente, las prestaciones siguientes:

A) Por la declaración judicial de nulidad absoluta, inexistencia e ineficacia de 5 cinco transacciones, disposiciones y/o transferencias interbancarias de los recursos de mi representada que fueron efectuadas el día 23 veintitrés de diciembre del año 2025 dos mil veinticinco de su cuenta de cheques número

***** con Clabe Interbancaria número
***** , la cual se tiene aperturada con la

institución bancaria demandada; transferencias que fueron realizadas sin el consentimiento de mi representada y/o el suscrito por un total de \$ ***** ***** *****

***** , las

cuales se especificarán a lo largo del presente escrito.

B) Una vez declarada procedente la prestación señalada en el inciso anterior, solicito la restitución, reembolso y/o devolución de la cantidad de \$***** ***** ***** ***** ***** **

¹ Nombre de la parte actora.

² Número de la parte demandada.

Primero. Presupuestos procesales

Segundo. Estudio de la acción

Para ello, el accionante narró los hechos siguientes:

***** ***** ***** ***** ***** ***** *



***** , operaciones que manifestó no reconocer ni haber autorizado.

✓ Que ese mismo día se comunicó a la institución bancaria demandada para reportar las operaciones y solicitar su aclaración; como consecuencia del reporte, la cuenta fue bloqueada por motivos de seguridad, por lo que el trece de enero de dos mil veintiséis acudió a una sucursal bancaria para gestionar su desbloqueo, donde realizó la actualización de datos, cambio de llaves y tokens y suscribió la documentación que le fue requerida.

✓ Que al no recibir la confirmación de la aclaración, regresó a la sucursal el catorce de enero, donde firmó documentación adicional relacionada con ésta y se efectuó el desbloqueo de la cuenta.

✓ Que el dieciséis de enero de dos mil veintiséis, recibió un correo electrónico de la institución bancaria demandada mediante el cual se le informó que la aclaración había sido registrada con el folio 20260116001415 y que la fecha probable de respuesta sería el veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

✓ Que finalmente, el diecinueve de enero de dos mil veintiséis, recibió la respuesta de la institución bancaria respecto de las cinco operaciones reclamadas, las cuales fueron calificadas como improcedentes.

En ese sentido cabe señalar que, del análisis integral a la demanda, se advierte que la acción ejercida en el presente juicio, es la de nulidad de los cargos realizados a la cuenta relativa al contrato de depósito bancario de dinero a la vista, ello en virtud de que, niega lisa y llanamente haber realizado las transacciones controvertidas.

Novena Época.
Registro: 172731.
Instancia: Primera Sala.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXV, Abril de 2007.
Materia(s): Civil.
Tesis: 1a./J. 11/2007.
Página: 143.

NULIDAD ABSOLUTA. PROCEDE CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FIRMA IMPRESA EN UN PAGARÉ (VOUCHER) SUSCRITO EN VIRTUD DE UNA COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO.

1. La existencia de la relación contractual, en virtud de la cual se abrieron las cuentas bancarias de la parte actora.

2. La existencia de las operaciones bancarias cuya nulidad demanda.

3. Que las transferencias no hayan sido autorizadas por la persona cuentahabiente, a través del uso de su firma electrónica, contraseñas y claves personales o número confidencial de identificación personal (nip), vigentes en el momento de dichas operaciones.

A fin de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba en el presente juicio, es menester considerar que los artículos 1194 y 1195 del código de comercio, disponen que el que afirma está obligado a probar y como consecuencia de ello, la parte actora debe probar su acción y el banco demandado sus excepciones; el que niega no está obligado a probar, sino en el caso de que su negación envuelva la

En tal sentido se ha pronunciado la otrora primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2018, respecto a la demanda por nulidad de vouchers, cuyas consideraciones son aplicables por analogía al presente asunto –por controvertirse operaciones bancarias–, según lo sostuvo la sala referida en la diversa contradicción 206/2020, pues, lo importante para este caso, es destacar a través de lo ya resuelto, la carga probatoria preponderante que tienen los bancos en el litigio contra el usuario, por ser la parte subordinante en la relación de consumo.

Todo lo anterior, en términos de lo resuelto por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 206/2020, génesis de la jurisprudencia de rubro:

Asimismo, aplica por analogía, la tesis del siguiente rubro:



Registro digital: 2019919.

Instancia: Primera Sala.

Décima Época.

Materias(s): Civil.

Tesis: 1a./J. 16/2019 (10a.).

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 66, mayo de 2019, Tomo II, página 1228.

Tipo: Jurisprudencia.

NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA.

Hechos no controvertidos

Definido lo anterior, del análisis del escrito de demanda y del diverso de contestación a la misma, se tiene que las partes no contravirtieron determinados hechos, por el contrario, los aceptaron, los cuales son:

a) La relación contractual que vincula a las partes, es decir, la celebración del contrato de depósito bancario de dinero a la vista, denominado cuenta única CIMA PM, número de cuenta ***** con clabe interbancaria *****.

b) La existencia de los cargos no reconocidos.

Lo anterior es así, porque en el escrito de demanda la actora refirió:

“...mi representada *****

*** y la parte demandada ***

celebramos un contrato de depósito de recursos a la vista, en el cual se me proporcionó el producto denominado Cuenta única CIMA PM, asignándome la cuenta de cheques número ***** con Clabe Interbancaria número ***** ”

³ Nombre de la parte actora.

(Hechos 1 y 2 del escrito de demanda).

“...1.- El correlativo es cierto. --- Sin embargo, se aclara que fue el 23 de julio de 2025 cuando **** y mi mandante celebraron el Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona Moral. --- La celebración de dicho contrato dio origen a la apertura de la cuenta ***** con clabe interbancaria ***** . --- Aclarado lo anterior, mi mandante recoge la confesión relativa a que la Actora celebró dicho contrato, por lo que reconoce y acepta los términos y condiciones establecido en el mismo, así como las cláusulas que lo componen...”

“...El 23 de diciembre de 2025 previo inicio de sesión en el portal de la banca electrónica, la actora, por conducto de su usuario *** —**** **** ***** —, realizó cinco transferencia electrónicas en su cuenta bancaria ***** --- i. Transferencia electrónica interbancaria, por la cantidad de \$1'685,000.00 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N)... --- ii. Transferencia electrónica interbancaria, por la cantidad de \$1'748,600.00 (un millón setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N)... --- iii. Transferencia

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente:

Por lo que ve al tercer elemento de la acción, consistente en que las transferencias bancarias no hayan sido autorizadas por la persona cuentahabiente, a través del uso de su firma electrónica, contraseñas y claves personales o número confidencial de identificación personal (nip), vigentes en el momento de dichas operaciones, también se satisfizo.

Ello toda vez que la parte actora en términos de lo dispuesto por el artículo 1195 del código de comercio, negó lisa y llanamente haber realizado, autorizado o externado su voluntad con las operaciones bancarias que objeta.

Establecido lo anterior, a las partes les fueron admitidas, las pruebas que se valoran enseguida.

- Confesión por interrogatorio que ofrecieron las partes a cargo de su respectiva contraria (prueba V de la actora y 1 de demandada), las cuales se desahogaron al tenor de las preguntas que fueron formuladas por las oferentes de manera

Séptima Época.
Registro: 245033.
Instancia: Sala Auxiliar.
Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Volumen 217-228.
Séptima Parte.
Materia(s): Común.
Página: 129
CONFESIONAL, VALOR DE LA.

- Carátula del contrato múltiple de servicios bancarios y financieros persona moral, clausulado del contrato de servicios transaccionales y estado de cuenta relativo a la cuenta de cheques 25601061270, clabe interbancaria 044494256010612707 (pruebas II y III de la actora, así como 4 y 5 de la demandada); las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 1238, 1241, 1296 y 1298 del código de comercio, por tratarse de documentos privados no objetados en cuanto a su autenticidad.

- Copia de bitácora transaccional (prueba 8 de la demandada).

- Copia de estado de cuenta de cheques 25601061270 (pruebas 12 de la demandada).

- Copia de guía denominada ScotiaWebTransferencias (prueba 7 de la demandada).

Artículo 100.- Las instituciones de crédito podrán microfilmear o grabar en discos ópticos, o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma.

En primer término, las certificaciones que obran en las documentales aportadas además de que son parcialmente legibles, según se advierte de su lectura, fueron realizadas por quien se ostenta en dichos actos como funcionario bancarios de la demandada, lo que no se corroboró.

Ello porque esa simple expresión por sí sola, no la faculta para la certificación de archivos, copias o impresiones obtenidas de los negativos originales de cámaras mediante la cual, se hubiere, en su caso, microfilmado libros, registros y documentos en general, que obren en poder de la demandada, relacionados con los actos de la misma, acorde con lo dispuesto por el numeral en comento, pues resulta necesario que les asista el carácter de funcionario autorizado de la institución bancaria referida, como lo precisa el numeral 90 de la ley de instituciones de crédito, a efecto de que estuviera en posibilidad de ejercer conforme a derecho, la facultad de certificación.

Los nombramientos del secretario y prosecretario del consejo de administración o consejo directivo deberán otorgarse en instrumento ante fedatario público y ser inscritos en el Registro Público de Comercio.

Es aplicable al caso concreto, por las razones que informa, el criterio:

CERTIFICACIÓN BANCARIA. LA REALIZADA POR UN APODERADO LEGAL ES VÁLIDA, SI ÉSTE ES FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RELATIVA [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA PC.I.C. J/63 C (10a.), DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO].

⁴ Número de instrumento.

Además acorde con el artículo 90 de la ley de instituciones de crédito, el nombramiento, entendido como el documento en que se otorga el cargo específico, deberá inscribirse en el registro público de comercio, previa ratificación de firmas, ante fedatario público.

Ello obedece a que los bancos, por la función que realizan, se encuentran obligados a resguardar los datos y negocios jurídicos de sus clientes, de manera que no cualquier persona externa a la organización de la entidad bancaria que no es funcionario puede certificar datos y documentos, pues únicamente quien forma parte de dicha institución y cuenta con la facultad de certificación puede tener acceso a la información que pretende certificar, incluso para evitar violentar el secreto bancario contemplado en el artículo 142 de la ley mencionada.

Décima Época.
Registro: 2016135.

En efecto, porque sólo una persona con rango de “funcionaria bancaria”, está en aptitud de conocer el funcionamiento interno de la institución bancaria, y se encuentra sujeta además, a todas las responsabilidades que regulan la materia en el supuesto de un indebido ejercicio de su empleo, como pudiera ser, por ejemplo, proporcionar a la autoridad judicial datos falsos, incompletos o sesgados, de ahí la relevancia que reviste la certeza de la información que aporte una persona con ese rango, lo cual, no se cumple en el presente asunto, en que, las personas que dieron fe, a raíz del poder especial que se les confirió, sólo revela un mero acto formal de compulsas de documentos, que de ninguna manera tiene el alcance material señalado anteriormente, esto es, el conocimiento interno de la institución a fin de que pueda discernir y avalar que la información aportada sea en su caso, completa e idónea para resolver el litigio, sin sesgos de algún tipo.

A guisa de ejemplo, la ley federal del trabajo establece en el artículo 20, los componentes mínimos y esenciales de una relación contractual laboral, esto es: la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio del pago de un salario; los cuales no se evidencian en el caso concreto, a fin

En ese sentido, al sustentarse la pericial en documentos que carecen de eficacia probatoria plena, debido a que, a los que fueron aportados y que se tomaron en cuenta para dictaminar, sólo se les atribuyó valor indiciario, al no estar debidamente certificados; por lo que, no son aptos para servir de base sólida a fin de que los expertos formulen sus conclusiones, pues no se tiene la plena certeza de la información que en los mismos se refleja.

Esos motivos bastan per se, para identificar la deficiencia probatoria en que incurrió la demandada, quien ofreció prueba pericial desahogada con sustento en información que ni siquiera se tiene certeza formal y material en el sentido de que, sea útil, idónea, completa y auténtica, para esclarecer el punto debatido dado que, como ya se explicó, no contienen firma autógrafa o electrónica ni certificación emanada de persona funcionaria bancaria facultada, que brinde certeza sobre la autenticidad y fiabilidad del método en que fue generada la información que contienen.

Registro digital: 2013524.
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
 Décima Época.
 Materias(s): Penal.
 Tesis: I.2o.P.49 P (10a.).
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
 Libro 38, enero de 2017.
 Tomo IV, página 2609.
 Tipo: Aislada.

Por tanto, no se dilucida el tema técnico particular al caso; ya que como se destacó, compete a la institución crediticia justificar, con base en lo sostenido por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.), que los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante las transacciones, se ajustaron a lo acordado con el usuario y a lo exigido por las disposiciones de carácter general ya invocadas, aunado a que, el procedimiento que se utilizó para autorizarlas, sea fiable.

⁵ “**Artículo 310.-** Las Instituciones deberán utilizar Factores de Autenticación para verificar la identidad de sus Usuarios y la facultad de estos para realizar operaciones a través del servicio de Banca Electrónica. [...]”

Registro digital: 237567.



Aunado a que tampoco se evidencia el procedimiento seguido para validar y autenticar la información contenida en la documentación que sirvió de base para su dictamen, por lo que su conclusión representa una conjetura que de tenerse por cierta, implicaría considerar que toda operación realizada en la banca electrónica, es efectuada por el usuario dado que es quien posee las claves de acceso respectivas y fue exitosa, lo que implicaría en principio una falacia lógica de petición de principio porque da por cierto aquello que es precisamente la materia de la controversia y del estudio experticial.

Sin que el perito de la demandada haya explicado o evidenciado, datos relacionados con la utilización del algoritmo desplegado por la parte actora, sin la intervención o alteración de un agente externo, y el comparado con el contenido en el registro del usuario en el sistema del banco; en la medida que no se ilustró sobre los códigos, algoritmos o expresiones que evidencien ese proceder, o pongan de manifiesto procedimiento seguido por el sistema del banco y que éste operó de manera correcta y validó debidamente la emisión de la autorización de las transacciones controvertidas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro:

Registro digital: 2007973.
 Instancia: Primera Sala.
 Décima Época.
 Materias(s): Civil.
 Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.).
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
 Libro 12, noviembre de 2014.
 Tomo I, página 706.
 Tipo: Aislada

Como ya se adelantó, no pasa inadvertido que en el peritaje, se indicó que el mismo se basó en documentos aportados al juicio, sin embargo, sólo se les concedió valor probatorio indiciario, por las razones antes indicadas; de ahí que no son susceptibles de generar plena convicción sobre el hecho que se pretende probar.

Todo lo anterior, permite concluir a este juzgador la ineficacia demostrativa de la prueba pericial de referencia, a fin de considerar, que la parte demandada cumplió con la carga probatoria en términos del estándar derivado de las jurisprudencias 16/2019 y 17/2021, ambas de la otrora primera sala de la suprema corte de justicia de la nación.

Así, con el material probatorio aportado, no se permite establecer con certeza que las operaciones controvertidas hubieren sido realizadas o autorizadas por la parte accionante, en tanto que en los datos en comento no existen referencias que identifiquen plenamente a la parte actora, como la iniciadora de la secuencia necesaria para la realización de ese tipo de operaciones.

Ya que correspondía a la demandada acreditar que fue la parte actora quien utilizó su número de identificación personal o la clave o firma electrónica vigentes, pues si bien existe la presunción respecto a la confidencialidad de tales mecanismos de autenticación, lo cierto es que, no es racionalmente viable afirmar de manera absoluta que la realización de las operaciones sólo es posible si el usuario digita el número de identificación personal, la clave personal o firma electrónica, porque la realidad imperante que se vive en la actualidad, pone de manifiesto la vulnerabilidad de esos

En ese sentido, se insiste, compete a la institución crediticia justificar, con base en lo sostenido por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.), que los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante las operaciones, se ajustaron a lo acordado con el usuario y a lo exigido por las disposiciones de carácter general ya invocadas, así como que, el procedimiento que se utilizó para autorizarlas, es fiable.

Y, relacionado con dichas disposiciones de carácter general, la sala mencionada destacó que concretamente debe justificarse, que el mecanismo de autenticación utilizado correspondía al establecido para la cuantía y formato de cada una de las operaciones, la emisión del comprobante y notificación al usuario de las mismas, entre otros que se puedan advertir de las disposiciones antes citadas y de lo pactado por las partes, según corresponda al monto y canal por el que se lleve a cabo cada operación controvertida.

Por lo cual, la prueba anterior, de su simple lectura, no arrojan información concreta y asimilable que permita concluir, que efectivamente, se otorgó el consentimiento de la parte actora, así como la validez de las operaciones que se objeta.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de rubro:

Décima Época.
Registro: 2020853.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h.
Materia(s): (Civil).
Tesis: I.3o.C.364 C (10a.).

Es aplicable al particular la jurisprudencia, de rubro:

Máxime que, no se aportaron argumentos concretos que den pauta para ampliar el análisis correspondiente en función a la regla de exhaustividad.

En consecuencia, como se adelantó se estima colmado el tercer elemento de la acción.

Lo que es así toda vez que, se insiste, al efecto resultaba necesario que el banco aportara diversas probanzas para demostrar, fehacientemente, el consentimiento de la parte actora respecto de las transferencias reseñadas, sin que lo haya realizado, aunado a que su contenido material resultaron insuficientes por lo ya expuesto.

Máxime que, se reitera, es la institución bancaria quien cuenta con los elementos para demostrar que en las operaciones de que se trata, se utilizaron los medios de identificación correspondientes, tales como claves o contraseñas y que se aplicaron en forma adecuada los mecanismos de seguridad acordados previamente con la cuentahabiente, pues la realización de los cargos se

En ese contexto, se tienen por justificados la totalidad de los elementos de la acción en estudio.

Enseguida se analizarán las excepciones opuestas por la parte demandada.

Se califica así, en razón de que para que proceda una excepción de oscuridad y defecto en la forma de plantear la demanda, se hace necesario que ese escrito se redacte de tal forma que los términos en que se hace, imposibilite entender qué es lo que demanda, por qué se demanda y los fundamentos legales de esto.

Luego, si del material probatorio ofrecido y, en especial, del escrito inicial de demanda se advierte que se precisa su nombre, que comparece por conducto de su administrador general único, la identificación de la demandada, su denominación, los conceptos que reclama, la clase de acción que se promueve e, incluso, los fundamentos de ello.

Época: Quinta.
Época Registro: 359003.
Instancia: Tercera Sala.
Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tomo XLVII.



Página: 4201.

OBLIGACIÓN, NATURALEZA DE LA.

Novena Época.
Registro: 169857.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXVII, abril de 2008.

SINE ACTIONE AGIS.

Por otra parte, la demandada hizo valer como excepciones



En efecto, la enjuiciada refiere que conforme a las cláusulas del contrato, la guarda y custodia del usuario, contraseña y e-llave o tokens, son responsabilidad exclusiva del cliente, por lo que la actora incumplió esa obligación al permitir que dichos medios estuvieran al alcance de un tercero; que la actora confirió la facultad a **** de realizar operaciones por orden y cuenta de ****; que ahora

Que la acora omitió custodiar adecuadamente sus medios de autenticación; que de la bitácora transaccional correspondiente a ambas cuentas se desprende que las operaciones reclamadas se realizaron bajo todos los mecanismos de seguridad pactados en los contratos materia de la litis y leyes aplicables.

Dichos planteamientos son infundados, en razón de que como se analizó a lo largo de la presente sentencia, al realizar el estudio oficioso de la acción ejercida, se valoraron las pruebas ofertadas, y se determinó que la carga probatoria se encontraba repartida entre las partes y no obstante que a lo largo de su contestación de demanda negó los hechos narrados por la actora, acreditar la autoría de ésta en las transferencias objetadas, por virtud de la carga que le fue atribuida al banco, se estimó que es quien debe disponer de

Por ende, no se revirtió la carga de la prueba a su contraria, en su caso, para desvirtuar alguna conducta de índole subjetiva, tal como las que la enjuiciada le atribuye, en el sentido de que compartió información confidencial o que actuó de manera descuidada.

Así es, para que resulten relevantes argumentos de tal naturaleza, esto es, que inciden en la conducta subjetiva de la parte actora, imputándole una negligencia en el uso de su tarjeta o claves privadas, en principio, la demandada debió acreditar los dos aspectos torales ya mencionados –que la actora autorizó, a través de su administrador, las operaciones y que el mecanismo electrónico necesario para validar las operaciones bancarias era fiable–, lo cual no probó, por ende, no procedió la reversión de la carga de la prueba que pretende imputarle en aspectos de índole subjetivo.

Máxime que, sus afirmaciones se encuentran sujetas a prueba, por constituir el sustento de su excepción, sin que de autos se desprenda que la parte demandada haya acreditado que la usuaria incurrió en alguna omisión o descuido graves, los cuales tampoco fueron reconocidos por la actora en la confesión por interrogatorio.

Consecuentemente, el planteamiento de la demandada, parte de una falacia lógica de petición de principio, porque da por cierto aquello que es precisamente la materia de la controversia.

Se califica como infundada dicha excepción, en razón de que, como ya se expuso en el apartado anterior, en términos de la jurisprudencia consultable en el semanario judicial de la federación, con el número de registro electrónico 67/2008, los afectados legalmente pueden objetar cargos, bajo el supuesto de que fueron aprobados por la institución de crédito, sin contar con su consentimiento, sin la obligación de agotar recurso alguno previo al juicio mercantil.

Ahora bien, respecto de la “EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE PAGO DE LOS INTERESES RECLAMADOS”, se analizará en el considerando correspondiente a dicho concepto.

Cuarto. Conclusiones

En las condiciones relatadas, debe acogerse la acción en ejercicio y, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2226 del código civil federal, supletorio del código de comercio, ante la falta de consentimiento, declararse la nulidad de las operaciones objetadas, consistentes en:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cinco transferencias electrónicas de la cuenta de depósito

***** clabe interbancaria *****; de
la actora, por las siguientes cantidades: ***** **

***** , ***** *

***** , *****
* ***** **

***** , ***** *

***** , *****

***** , *****

***** ; que en conjunto
asciende a la cantidad de *****

Consecuentemente, se condena a la parte demandada, a
restituir la cantidad de *****

***** a la cuenta ***** clabe
interbancaria ***** de la parte actora, por ____
corresponder a recursos propios que fueron sustraídos a
causa de las cinco operaciones declaradas nulas.

En el contrato de depósito bancario, los intereses ordinarios derivan del acuerdo de voluntades e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de transferir la propiedad del dinero al banco, quien lo utiliza para llevar a cabo las funciones propias de su naturaleza como institución financiera; mientras que los intereses moratorios provienen

En apoyo de lo anterior se cita, por las razones que informa, la jurisprudencia cuyo rubro establece:

De cuya ejecutoria, se destacan los siguientes párrafos que avalan la presente postura.

Lo anterior, porque es obligación de las instituciones de crédito, como depositarias, la restitución a sus cuentahabientes de las cantidades entregadas para su cuidado y que, al ser dispuestas sin autorización de la persona titular de la cuenta de depósito, deben ser reembolsadas en cuanto se da el aviso y no a partir de lo que estipule la sentencia que declara la nulidad judicial de los actos relativos; puesto que, otra vez en términos del artículo 2226(22) del Código Civil Federal, si el acto viciado produce provisionalmente sus efectos y se destruyen retroactivamente cuando se pronuncia su nulidad, la resolución judicial sólo será útil para dar razón al cuentahabiente sobre la falta de cuidado en que incurre la institución bancaria y para obligarla a devolver, con intereses, las cantidades desde el momento de su sustracción, al quedar destruida la presunción de validez del acto.

Por todas estas razones, si en términos de lo previsto en el artículo 362 del Código de Comercio, la condena al pago de los intereses moratorios al tipo legal constituye una sanción por el impago de todo o parte de lo adeudado por el incumplimiento de la obligación del banco de guardar y custodiar el dinero que recibe en depósito, del cual no puede disponer sino con el consentimiento del depositante o persona autorizada por éste, la institución bancaria debe cubrir los intereses moratorios sobre la suerte principal, a partir de que se dispuso indebidamente del



dinero de la persona cuentahabiente y hasta el día que se realice la restitución de la totalidad del importe sustraído, ya sea porque lo haga de manera voluntaria o porque se le obligue mediante un proceso o procedimiento.

Por tanto, se condena a la parte demandada al pago a la parte actora, por concepto de intereses moratorios, tomando en cuenta la tasa de interés al tipo legal, esto es, al 6% seis por ciento anual, respecto del monto de *****

***** a cuya restitución se condenó,
desde el doce de enero de dos mil veintiséis, por así
solicitarlo la parte actora, y hasta el pago total de los mismos;
concepto que deberá cuantificarse en la etapa ejecutiva de la
sentencia.

Por lo anterior, se queda atendida la “EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE LOS INTERESES RECLAMADOS”, hecha valer por la demandada.

Sexto. Alegatos

Respecto de los alegatos formulados por las partes, indíquesele que, de su análisis, no se advierte la existencia de alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, por lo que resulta innecesario explicitar contestación adicional a lo anteriormente sustentado. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro:

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Registro digital: 2031678.

Instancia: Plenos Regionales.

Duodécima Época.

Materias(s): Civil.

Tesis: PR.A.C.CS. J/1 C (12a.).

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Jurisprudencia.

ALEGATOS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA PERSONA JUZGADORA NO ESTÁ OBLIGADA A TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL DICTAR SENTENCIA.

Séptimo. Gastos y costas

Por lo que hace a la mala fe, se puede definir como el acto procesal consistente en utilizar la acción, excepciones o



Por su parte, la otrora sala auxiliar, del máximo tribunal de justicia del país, al interpretar el código de comercio, en lo relativo a la mala fe y temeridad, estableció que la temeridad no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la defensa, o bien en la oposición sin justa causa a la acción que se intenta, o en el sólo prurito de hacer valer una pretensión aun cuando ésta no resulte contraria a derecho o se carezca de pruebas para fundarla, pues lo que caracteriza la temeridad o mala fe es el elemento subjetivo que lleva al litigante a sostener su pretensión con pleno conocimiento de que la razón no le asiste, lo cual tiene su fundamento en la tesis con datos de localización y rubro:

Por lo que al realizar una aplicación, a contrario sensu, de las normas indicadas del código de comercio, se puede concluir, a este respecto, que no se hará condenación en costas cuando no se esté en alguno de los supuestos señalados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con datos de localización y rubro:

[illegible]

En la especie, no se está en presencia de algún supuesto de condenación en costas forzoso, ni existe evidencia subjetiva de que, alguna de las partes se haya conducido con temeridad o mala fe; se afirma lo anterior, ya que, por lo que hace a la parte actora, no se advierte que para sostener su pretensión, haya propuesto su demanda no obstante de tener pleno conocimiento de que la razón no le asiste, o que incluso se haya actuado con la intención de causar un perjuicio a otro, ya que incluso, se aportaron las pruebas que estimó necesarias para sus pretensiones en el juicio; y en lo que atañe a la parte demandada, no se advierte que al formular su contestación a la demanda y correspondientes excepciones, se haya conducido en esos términos; por tanto, no deberá hacerse condenación al pago de costas, por lo que corresponde a esta instancia.

En el caso concreto, tampoco se considera que se actualice la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 1084 del código de comercio, porque las excepciones de la parte demandada, resultaron desestimadas a raíz de un análisis de fondo, no así en virtud de su improcedencia o inoperancia, tal como lo precisó la otrora primera sala de la suprema corte de justicia de la nación en la jurisprudencia, cuyo rubro establece:

También apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro:

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1321, 1322, 1324, 1327 y 1390 bis 39 del código de comercio, se resuelve:

Primero. Los presupuestos procesales se surten al tenor de lo expresado en el punto primero de la parte considerativa de esta sentencia.

Segundo. La parte actora justificó los elementos constitutivos de su acción, mientras que la demandada no justificó sus excepciones.

Tercero. Se declara la nulidad de las operaciones bancarias objetadas, descritas en el resultando primero, ante la falta de consentimiento.

En los términos ordenados en el considerando segundo de este fallo.

Cuarto. Se condena a la demandada a la restitución a la parte actora de *****

***** cuenta ***** clabe interbancaria
***** de la parte actora, por corresponder a
** recursos propios que fueron sustraídos a causa de las

operaciones declaradas nulas.

*** a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

164965606_2742000041034841027.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	RUBEN OLVERA ARREOLA		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.dc		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:04:28 - 26/08/26 16:04:28		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	76 ae 2c 26 ae 48 57 35 f6 3a 04 16 e0 49 4a ed b7 eb 60 e1 ab d8 59 aa b5 c7 fd de 12 36 28 ce a1 8f b4 99 7b 78 ea 0d f1 6d 42 9c 8a b4 84 86 a6 92 b1 f0 15 46 38 f5 92 86 43 fd 0a 21 33 5c b6 46 a0 04 d1 e4 83 f8 ca 41 28 d1 4b fa f5 1a 84 b0 42 69 59 68 05 5d 25 63 ce 2f b7 3d 28 87 8d 77 86 db 82 fc 73 9a c1 6e c0 92 19 64 18 24 36 b4 39 78 8b 38 c2 2b 3f 9d cc 7d d8 5e 41 97 b1 8d f3 2b 35 eb 58 84 21 69 03 47 06 a4 8f 05 36 7b 45 94 37 88 1b e5 ad 31 67 95 d4 cb 28 02 8b e1 cb 6b ab 66 5d c4 74 47 a1 0b 5a 14 5a a2 05 19 ec 4a 1e dc 72 db 42 4a 44 a4 8d 5e 65 00 9a 45 8f 79 b4 49 8d b4 e9 11 df 0a d4 6c f0 72 c1 ad 22 93 90 46 27 e8 10 20 80 ad c9 07 f5 f1 71 40 ca 2d e0 2d 6d f4 d2 7b f4 0f 57 80 79 1a 45 a6 cb 5f 42 c6 f0 91 80 d6 d1 93 50 31 3c 69 58 86 f4 bf 69 40 33 ce 52 8b aa 7c 37 f9 63 54 3c 35 c9 76 13 9e 42 ae 28 46 70 1a 10 d4 95 10 98 d3 08 44 c0 57 87 d9 03 8f 47 78 01 80 64 9b d4 c5 6f b0 97 0b 41 62 4e 9d 1b 13 70 44 0b 7a c0 47 43 c2 95 b7 c6 23 e2 e6 dd c7 29 43 d5 aa 0c bb 79 42 bc 4b 47 83 f3 ff dc f6 2d 12 ba 05 5f 9d ee 5f a9 aa 5e 48 87 51 63 94 64 89 2b 85 d9 d3 d5 ba a3 2c 29 b6 4e fb 34 1d fc e6 3b c2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:04:29 - 26/08/26 16:04:29			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.dc			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:04:29 - 26/08/26 16:04:29			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	197216837			
Datos estampillados:	ee8TkoExJTEUI5KAHkKqAgegB2c=			



FIRMANTE						
Nombre:	JESUS VLADIMIR LEON MOSTACCI	Validez:	BIEN	Vigente		
FIRMA						
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.ec	Revocación:	Bien	No revocado		
Fecha (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:37:46 - 26/08/26 16:37:46	Status:	Bien	Valida		
Algoritmo:	RSA-SHA256					
Cadena de firma:	90 3a e9 70 98 72 ca d5 2b b5 57 fd ab 78 a7 8d 98 14 0c 8e 7a 7b 98 fe 33 fe 83 ef 52 cd 1a a9 27 3a d0 fd ca d4 1d ea 2f 10 bc c4 2d 55 81 3b 5d 65 b9 a9 7b 7f 3b d8 54 bb 82 45 52 54 c6 f3 51 ed fc 60 e5 34 c9 be 5d 69 57 31 58 99 8a de 0c e4 6b 50 47 b2 82 d9 fd f0 38 8c 24 fc 72 0a 4a 3f 64 85 cb 05 70 4e 71 ec 9c db ae af 35 56 61 fe 8a af 61 73 42 d5 98 75 be 21 3e a0 06 58 b8 51 e6 bf 49 d6 4b 21 da 09 8e 8b 0b e7 0f e0 91 9c 1d 46 aa 87 3b be c3 7a d4 e6 a3 46 94 f9 d8 5b 1d b7 52 75 2c be 3b 83 8c f8 f5 c2 53 e9 f2 67 ea 65 55 85 43 a1 b8 d0 a5 45 fa a0 41 8c f9 b6 2b 0d 47 1c 71 8b 08 e7 ee d2 df d3 fb 9b 60 e0 63 76 62 ec 11 4c df a1 80 c1 0b 1b 37 b0 01 f4 bd 2f c0 11 2f 5a fb cd b1 71 9b 54 11 cc 57 28 8c 4b 11 8d 78 83 5a f5 1f fd e1 ad e5 b6 f0 a5 d2 81 9d 62 c3 98 c3 7f 9c c6 5e c7 2a 8e 8d bd b5 5b 26 cc a9 ea 48 17 24 8c d2 f0 83 7f bb 52 83 58 3a 25 ec 0d 1e 37 98 55 eb 62 43 bc f8 c0 4f 44 cb 47 da 02 1a a5 d1 6b 01 f0 18 67 d1 3d fd de 09 d2 d0 98 33 7e 68 a9 2d 0f ca ce a0 c4 24 57 34 11 9d ca ce d7 50 4f 76 f9 ad 6b d3 4c 08 25 5e 57 ed 7c f6 30 c7 92 1a 60 c0 b9 63 7d 29 28 f3 5a 54 0e 88 56 bc 22 ea 83 3e b3					
OCSF						
Fecha: (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:37:46 - 26/08/26 16:37:46					
Nombre del respondedor:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.ec					
TSP						
Fecha : (UTC/ CDMX)	26/08/26 22:37:46 - 26/08/26 16:37:46					
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Identificador de la respuesta TSP:	197245194					
Datos estampillados:	q4wOAINb2XF85tHP48N3HBx6GHw=					

El veintiseis de agosto de dos mil veintiseis, el licenciado Rubén Olvera Arreola, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Jalisco, Especializado en Juicios Orales, con sede en Zapopan, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.